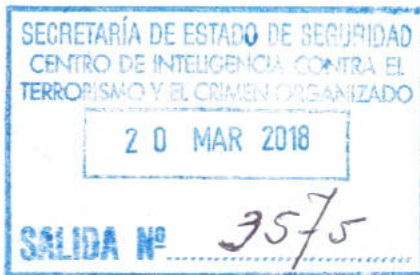




MINISTERIO
DEL INTERIOR



SECRETARÍA DE ESTADO
DE SEGURIDAD

CENTRO DE INTELIGENCIA
CONTRA EL TERRORISMO
Y EL CRIMEN ORGANIZADO

Expediente número 001-020275

Vista la solicitud de acceso a la información pública realizada por [REDACTED], formulada al amparo de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en demanda de que se le facilite la siguiente información:

- Número de investigaciones yihadistas e investigados en todas y cada una de las provincias de España (sobre todo las de Castilla y León) en los últimos años (desglosado por años).
- Número de investigados que son menores en todas y cada una de las provincias de España (sobre todo las de Castilla y León) en los últimos años (desglosado por años).
- Condenados e internos pendientes de juicio por terrorismo yihadista en todas y cada una de las cárceles españolas (sobre todo las de Castilla y León).

Se informa que, a las cuestiones planteadas, al CITCO le competen los dos primeros de los puntos, a los que les resultan de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS

PRIMERO. Según lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 770/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, corresponde al CITCO la recepción, integración y análisis de la información estratégica disponible en la lucha contra todo tipo de delincuencia organizada o grave, terrorismo y radicalismo violento, el diseño de estrategias específicas contra estas amenazas y su financiación, así como, en su caso, el establecimiento de criterios de actuación y coordinación operativa de los organismos actuantes en los supuestos de coincidencia o concurrencia en las investigaciones, y en particular, sobre estas materias: *"Elaborar, en coordinación con el Gabinete de Coordinación y Estudios, las informaciones estadísticas no clasificadas relacionadas con estas materias, en especial la estadística oficial sobre drogas"*.

SEGUNDO. El artículo 14 de la Ley 19/2013 establece los límites al derecho de acceso entre los que figuran la seguridad pública y la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.

TERCERO. El artículo 18. E) de la Ley 19/2013 señala como causa de inadmisión las solicitudes que tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de la ley.

CUARTO.- Por último, el artículo 20 de la Ley establece que "la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver".

